

Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia de 5º Turno N° 132 de 1ro. de octubre de 2007.-

VISTOS:

Para sentencia definitiva de 1ra instancia estos autos rotulados: "AA c/ Ministerio del Interior Proceso de Amparo" (Fa.2-44441/2007); seguidos con intervención del Sr. Fiscal Ldo. Nacional en lo Civil de 8º turno.

RESULTANDO:

1) Que el 25 de setiembre de 2007 el Sr. Coordinador General de BB se presenta ante esta Sede y promueve acción de amparo contra el ESTADO (Poder Ejecutivo - Ministerio del Interior).

Manifiesta: a) que el acceso a la información es un derecho en sí mismo, además de un medio necesario para el ejercicio de otros derechos:

b) que se ha solicitado a la contraparte información indispensable a fin de comprobar el efectivo goce del derecho a la libertad y seguridad personal por la infancia y adolescencia nacionales: y verificar la forma en que se está cumpliendo el principio de excepcionalidad de la detención dispuesto por normativa nacional e internacional:

c) que, además de ser un derecho individual, el acceso a la información es un derecho social por estar asociado al interés público (bien común) y el único límite externo a su ejercicio debe encontrarse en el Orden Jurídico Superior, Constitución o Ley:

d) que la legitimación activa la posee todo ciudadano.

Agrega: a) que el 29 de marzo de 2007 solicitó la información que detalla en el Capítulo 2do. Nles. 1 y 2 de fs. 12:

b) que el 26 de agosto de 2007 se configuró la denegatoria ficta de la solicitud:

c) que el 29 de agosto se recurrió en tiempo y forma tal denegatoria.

Señala además: a) que la competencia de la Sede surge del art. 195 del C.N.A.

b) que la legitimación activa surge de los arts. 195 y 196 del C.N.A., 42 del C.G.P. y 1º de la Ley Nro. 16.011:

c) que la legitimación pasiva surge de la ley orgánica del Ministerio del Interior:

d) de la afectación de derechos (el derecho a la libertad y la seguridad personal y la excepcionalidad de la privación de libertad).

Ofrece prueba y solicita que en definitiva "SE CONDENE A LA DEMANDADA A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE LE FUERA OPORTUNAMENTE SOLICITADA"

2) Que recae la providencia Nro. 4446, de fecha 27 de setiembre de 2007, de fs. 23 vto. Por la que se convoca a las partes y al Ministerio Público a audiencia.

3) Que el 28 de setiembre de 2007 se celebra la audiencia de rigor en cuyo transcurso se oye la contestación de la parte demandada, la que solicita el rechazo de la acción entablada. Se refiere al antecedente administrativo que obra en el Ministerio demandado, entra a considerar aspectos formales (se estima improcedente la acción por no estarse ante una actividad administrativa manifiestamente ilegítima, que hay otra vía pendiente de resolución para satisfacer la pretensión de la parte actora), que "la presente acción carece de objeto desde que la Administración se encuentra avocada a procurar el

cumplimiento de la Ley; y la presente acción exorbita el ámbito y la finalidad para la que la ley fue creada”, que pese al recurso administrativo interpuesto por la actora no se ha fundamentado pero igual “ la Administración continúa impulsando el trámite iniciado a instancias del promotor” pese a que “no surge que el promotor hubiera obrado diligentemente a los efectos de lograr el fin propuesto” y “ no se soslaya la más mínima actividad ilegítima por parte de la administración así como tampoco se evidencia la más mínima lesión, ni abusos ni irregularidades que puedan tentar contra los derechos humanos”. Ofrece prueba.

Continuando con la audiencia, se tiene por inútilmente tentada la conciliación, se fija el objeto de proceso, se admite la prueba ofrecida y ambas partes alegan de bien probado.

4) Que se oye al Ministerio Público, quien se expide según vista de fs. 52 – 53 en el sentido de que “la acción habrá de ser desestimada por no haberse comprobado o acreditado las cargas específicas previstas por el actor en el derecho que invoca y teniendo en cuenta el principio dispositivo del art. 198 del C.G.P.

5) Que por auto Nro. 4489/2007, se fs. 53 se convoca a la audiencia de hoy para dictado de sentencia.

CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo a lo previsto por el art. 198 del C.G.P. esta sentencia ha de recaer “ sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas”.....declarando “ el derecho de los litigantes “ PRINCIPIO DE CONGRUENCIA que no es sino una relación “...entre los dos grandes elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión. Hay una necesidad de correspondencia entre ambos extremos que funciona como condición del proceso verdadero (“Prueba, incongruencia y defensa en juicio” Augusto M. Morello, pág. 37), principio de vital importancia por su raigambre constitucional, al ser consecuencial del principio dispositivo el que se basa en norma superior según la que nadie “...será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” (art. 10 sistema jurídico no totalitario principio de la libertad.

2) Que ante la acción de amparo incoada en autos por el Sr. Coordinador de BB, la parte demandada contesta en los términos reseñados en el Resultando 1) de esta sentencia.

En su escrito el Ministerio del Interior sostiene:

a) en el Nal. I).- ANTECEDENTES: que se le han peticionado “los datos estadísticos relativos a las intervenciones policiales de los últimos diez años” (fs. 13) incurriendo en error, pues los datos solicitados se limitan a “los últimos 3 años – 2006 inclusive” (fs. 3 y 32).

b) en el Nal. II).- ASPECTOS FORMALES: que “no estamos ante una actividad administrativa manifiestamente ilegítima” y “que existe otra vía pendiente de resolución para la satisfacción de su pretensión”.

- En cuanto primer extremo, la falta de “ilegitimidad manifiesta” (según expresión empleada por el art. 1° de la Ley Nro. 16.011, del 19 de diciembre de 1988, atento a lo previsto por el art. 195 inc. 3 del C.N.A., ella se presume siendo de carga de la parte demandada su prueba; el único requisito exigible

para no sustanciar la acción es “que exista proceso jurisdiccional pendiente”. En la especie, el Ministerio del Interior no cumplió con el “onus” referenciado; en suma existe ilegitimidad manifiesta desde que, como señala el Ministerio Público, la referida presunción legal “no ha sido destruida por la parte demandada” pese a que “resulta un imperativo de su propio interés” (fs. 53).

Más aún la ilegitimidad manifiesta surge, como lo menciona la parte actora, de “la denegatoria ficta de la solicitud impetrada” (fs. 13), acreditada mediante la documentación que acompaña al libelo introductorio, lo que ha motivado el acudir a la vía recursiva. BB tiene como objetivo primordial “aportar al mejoramiento del desarrollo de las prácticas judiciales, policiales y administrativas posteriores a la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia a través del seguimiento de expedientes judiciales y de casos relevantes”, certifica a fs. 5 CC (oficial a cargo de UNICEF Uruguay); de ahí la impostergable necesidad de contar con los datos solicitados para el “seguimiento de casos relevantes y situaciones en las cuales podría llegar a existir una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes” como se manifiesta al presentar el petitorio ante el Ministerio demandado (fs. 2 vto.).

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, deberes y garantías y tienen “derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, según los arts. 2 y 3 de C.N.A.; Código que debe interpretarse e integrarse atendiendo “al interés superior del niño y adolescente” (art. 6) y que pone a cargo del Estado las conductas que detalla en su art. 7 (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y adolescentes). Más aún, como indican los Dres. Balbela- Pérez Manrique, la acción de amparo del art. 195 del Código Multicitado “tiene por efecto último hacer eficaces las normas que enuncian derechos en el Código, especialmente aquellas que imponen fuertes responsabilidades al Estado, máxime en un país con serios problemas sociales en los que no será posible sin un fuerte impulso a las políticas sociales de integración y el robustecimiento y adaptación de las instituciones básicas de integración: familia, escuela o educación en general y trabajo digno.

Justamente con el fin de cerrar el proceso de garantías y pensando en los derechos humanos denominados económicos, sociales y culturales, se ha concedido a los legitimados (en una gama amplísima) la posibilidad de exigir una decisión judicial que obligue a las autoridades públicas o a los privados en su caso, a prestar de manera adecuada los servicios necesarios y a poner en funcionamiento las políticas necesarias para la protección de los derechos de los niños y adolescentes” (Código de la Niñez y la Adolescencia, pág. 271).

En cuanto al segundo extremo, la existencia de otra vía pendiente de resolución, por lo que viene de expresarse en líneas anteriores, debe desestimarse.

c) en el Nal. III).- EL OBJETO DE LA ACCION: que “la presente acción carece de objeto”, que ella exorbita “el ámbito y la finalidad para que la ley fue creada” que “no surge que se haya fundamentado el recurso administrativo interpuesto” y que sin soslayar responsabilidad “la administración ha actuado con total buena fe”

En cuanto al primer extremo, no cabe afirmar que la presente carece de objeto cuando no se ha logrado la información solicitada según lo admite la propia Administración al reconocer que ella “continúa impulsando el trámite iniciado a

instancias del promotor” (fs. 46 vto.), que el expediente administrativo “aún se encuentra pendiente de resolución” (fs. 47 y vto.).

En cuanto al segundo extremo, tampoco puede afirmarse que la acción entablada es exorbitante pues la misma se rige no sólo por la Ley Nro. 16.011 sino también por las modificaciones que le introdujo el legislador en el art. 195 de la Ley Nro. 17.823.

En cuanto a que no se ha fundamentado el recurso de revocación interpuesto del 27 de agosto de 2007, como ya se ha expresado se trata de un argumento que no es de recibo.

Sin perjuicio de lo que ya se ha dicho, cabe agregar siguiendo al distinguido Sr. Constitucionalista Dr. Horacio Casinelli Muñoz, que “El art. 317 de la Constitución no condiciona la viabilidad de los recursos administrativos a ninguna carga de fundamentar el petitorio. Basta que la voluntad de impugnar el acto recurrido quede expresada aunque no se manifiesten los motivos de la impugnación para que constitucionalmente deba tenerse por interpuesto el recurso correspondiente” (“Recurso administrativo sin expresión de fundamentos” R.D.J.A., T.67, pág.301).

Y, el tenor de lo dispuesto por el art. 319 de la Carta Magna, el agotamiento de la vía administrativa sólo es exigible para el ejercicio de la acción de nulidad ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo.

En cuanto a la conducta desarrollada por la Administración, según surge del propio expediente administrativo Nro. 2945/2007, la misma ha debido observar la omisión del peticionante, quien no acredita documentalmente y desde el inicio la calidad que invoca sino que lo hace a posteriori, al evacuar la vista que le confirió el Ministerio.

Sin perjuicio de ello, es de agregar: 1°) que tal pieza no se ha movilizó desde el 29 de agosto de 2007 (Dict. Nro. 1765/07)

2°) que la presente acción de amparo se presenta dentro del plazo legal (Art. 195 inc. 4 C.N.A.)

3) Que, como consecuencia de lo manifestado en los Considerandos que anteceden, no habiendo la Administración demandada manifestado reserva alguna en cuanto a brindar la información solicitada ni negado que lleva “un registro de los datos estadísticos relativos a intervenciones y detenciones policiales” y “que es usual que el Ministerio del Interior proporcione informaciones como la requerida” (fs. 15) desde que, como enseña el Dr. Miguel A. Semino, la libertad de información implica el derecho que asiste a todo hombre a dar noticia, de enterar a los demás, sin censura previa, de los hechos y las opiniones o ideas, y el derecho que asiste a todo hombre de saber, de tener noticia, de estar enterado con exactitud, veracidad, imparcialidad, de los hechos, ideas u opiniones” (“La libertad de información y las Constituciones europeas y americanas”, R.D.J.A. T.60, pág. 176), a lo que agregaríamos derecho al que la doctrina constitucionalista moderna considera tan importante que es comparable sólo con los derechos a la vida y a la libertad física, y desde que “La interpretación del Derecho ha de entenderse conectada íntimamente al modelo de Estado, y por tanto, en el Estado constitucional la interpretación de las normas ha de hacerse desde la Constitución y en relación con los presupuestos de ese modelo de Estado...” (“Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico”, María Luisa Balaguer Callejón, pág 165), habrá de hacerse lugar a la pretensión hecha valer en obrados.

Por tales fundamentos, y lo dispuesto por los arts. 72 de la Constitución, 76 inc. 1 A) y 12 del C.N.A. y 42 del C.G.P. y demás disposiciones legales citadas.

FALLO:

AMPARANDO a la parte actora en estos autos, y en mérito a ello, DISPONIENDO: a) que el ESTADO – PODER EJECUTIVO (Ministerio del Interior) deberá proporcionar a aquella la información que la misma solicita, según se detalla en el Capítulo Segundo, Nal. 1 de fs. 12 de esta pieza.

b) que el Estado (M.I.) dispondrá de un plazo de 45(cuarenta y cinco) días para cumplir lo establecido en el apartado precedente.

Expídanse testimonios y, ejecutoriada que sea, archívese.

Dra. Walkyria Raggio Faccioli. Juez Letrado.